

## ASALTO MAFIOSO A LA INSTITUCIONALIDAD

# Democracia y narcotráfico en Colombia

*Diana Gómez Navas<sup>1</sup>*

Colombia ha sido señalada en varias oportunidades como la democracia más antigua de América Latina pero a la vez como uno de los países más violentos del mundo. Estas afirmaciones provocan ciertos resquemores pero también muchos cuestionamientos sobre el tipo de régimen y cultura política que se ha construido desde los albores de la república. Una de las consecuencias de esta perversa convivencia entre democracia y violencia es el levantamiento de una economía del narcotráfico que finalmente hizo posible la creación de unas estructuras mafiosas con capacidad de imponerse en el mundo de la política,

la economía y la cultura colombianas para asaltar desde allí al Estado y a la sociedad. Hablar sobre cuáles fueron los caminos que el país labró para llegar a tan desalentador panorama necesariamente involucra la relación entre partidos y régimen político, las dinámicas que éstos tejieron como correas de comunicación entre el Estado y la sociedad y, en últimas, a su papel en la construcción de un proyecto de nación.

---

<sup>1</sup> Investigadora del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano IPAZUD de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.



Aunque al comienzo del artículo hago énfasis en la relación entre el sistema de partidos y el régimen político, al final la dejo un tanto al margen, no por descuido, sino porque la explosión de partidos y movimientos políticos que empezó en años posteriores al fin del Frente Nacional y que se reafirmó con la Constitución de 1991 sólo es el reflejo de las llamadas microempresas electorales: entidades surgidas de las mismas clases políticas tradicionales en reacción al descrédito del ejercicio de la representación política, revestidas con nuevos nombres y consignas, ausentes de derroteros programáticos, pero que finalmente les han permitido a unos grupúsculos mantenerse en el poder; en otras palabras, son los mismos y promueven las mismas prácticas. En últimas, estos “partidos de segunda”, que no nombro, son una de las evidencias patentes del asalto mafioso a la política y la democracia en Colombia.

### **De la Violencia al Frente Nacional: Licencias de azules y rojos que viciaron la democracia en Colombia**

La configuración del territorio nacional, con base en la colonización constante, la separación entre regiones y la distancia entre las provincias y unas ciudades donde se concentraba la vida política, económica y social del país, creó un fuerte dualismo entre el centro y la periferia. Este dualismo propició la constitución de unas regiones no integradas al desarrollo

nacional pero con la presencia de poderes locales restringidos a castas o familias con la capacidad de arbitrar la vida de sus territorios y comunidades, al tiempo que erigió un poder central con limitaciones para imponer un proyecto nacional unificador y que, por lo mismo, se supeditó a la intermediación de esas élites locales donde predominaban los líderes liberales y conservadores. De esta manera se impuso un proyecto de integración nacional sometido a un poder sometido a unos cuadros regionales que operaron como partidos, sujetos a propósitos particularistas, que incapaces de resolver las necesidades regionales, permitieron la coexistencia de violencia y democracia, de exceso de informalidades y de pobreza institucionales. El copamiento precario del territorio nacional en medio de una modernización traumática condujo a que estos partidos se abalanzaran a una guerra interna, que inició el denominado periodo de La Violencia.

Precisamente, el periodo conocido como la Violencia mostró una contradicción entre dos partidos políticos tradicionales, cuyo choque estuvo lejos de representar doctrinas y propuestas claramente diferentes. La forma disgregada como se constituyó el Estado-nación, a partir de disputas regionales y locales entre unas fuerzas dispuestas a preservar sus dominios y otras con el interés de conquistar los propios, hizo de los partidos los canales de transmisión de rencillas particulares que adquirieron acentos diferentes de acuerdo al territorio en el que se desarrollaban, pero que de cualquier manera se



parecían en la forma como los directorios de los partidos liberal y conservador mediaban para sus beneficios electorales y burocráticos con los líderes locales y regionales, mediación que estuvo determinada por la ilegalidad y la ilegitimidad: la violencia y la clientela.

Estas dinámicas que caracterizaron la forma como se erigió nuestro sistema de partidos y, la manera como éstos han hecho y hacen política, muestra cómo la vida nacional se desarrolló a partir de prácticas como la informalidad, la ilegalidad y la criminalidad que permearon las instituciones y viciaron la democracia. En este panorama, no fue evidente la apuesta programática de cada uno de los partidos, ni la existencia de unas bases sociales adheridas por la identificación y la disciplina partidista; más bien lo que prosperó fueron unas estructuras verticales, cuyos directivos se caracterizaron por pertenecer a determinadas castas familiares —obviamente con posesiones de alto capital socioeconómico y educativo—, cuyo papel al interior de los partidos buscaba marcar algunas tendencias ideológicamente no muy claras, pero sí bastante vehementes en el discurso. Este exceso de interés inmediato y de escasa separación ideológica favoreció que al interior de los partidos se fraguaran permanentes divisiones, que sin duda fueron tanto más evidentes en el ámbito regional y local, pues allí la adhesión a un partido u otro o a alguna facción de un mismo partido no se daba por las tendencias que alguno de sus directivos nacionales pudiera representar en el espectro democrático, sino por el tipo de

---

**E**ste exceso de interés inmediato y de escasa separación ideológica favoreció que al interior de los partidos se fraguaran permanentes divisiones

---

intermediación que éstos entablaran con los líderes locales y regionales, quienes poseían alta capacidad de maniobra para manejar a sus poblaciones y, en esta medida para garantizar votos.

Esta precariedad en la formación y en la forma de hacer política de los partidos tradicionales se acentuó con el pacto del Frente Nacional<sup>2</sup>. Al Frente no sólo llegaron partidos divididos (al interior) y sin propuestas programáticas e ideológicas cohesionadas que logran la inserción del país en un sistema democrático, integrador, modernizador y desarrollista, sino que el reparto paritario de todos los puestos burocráticos del Congreso y de los cuerpos colegiados subnacionales terminó por anular la necesaria contradicción y el ejercicio de la oposición propios de un sistema democrático moderno, lo cual anquilosó aún más a los partidos y banalizó la política, pues las divisiones al interior de cada uno de ellos se incrementaron en perspectiva de personalismos nacionales y regionales.

---

2 Con el Pacto del Frente Nacional, liberales y conservadores no sólo buscaron concertar la fórmula que les devolviera el poder perdido ante la dictadura, sino mantenerse en él a través de un sistema que les permitiría compartirlo, alejando el uso abierto de la violencia que antes utilizaron uno en contra del otro.



Si bien es cierto que el uso abierto de la violencia como mecanismo para saldar las disputas partidistas y electorales se anuló con el pacto, el carácter cerrado y excluyente del mismo no sólo le negó la posibilidad a corrientes políticas alternativas al liberalismo o al conservatismo –lo cual desencadenaría otro tipo de violencias políticas-, sino que terminó por erosionar las leves tendencias ideológicas que entre ambos partidos podían vislumbrarse, lo que produce unos partidos sin diferencias ni apuestas programáticas claras, que le permitieran a los electores al menos tener dos opciones entre las cuales escoger. Esto además de trivializar la democracia como procedimiento, banalizó la política, porque por un lado, en la medida en que trascurrieron los procesos electorales aumentó la abstención y, por otro, las disputas electorales se trasladaron al interior de los propios partidos<sup>3</sup>, cuyos dirigentes necesitaban captar electores que, ante el descrédito del sistema y la falta de propuestas, se mostraban reacios para ir a las urnas, los cuales fueron cautivos por la tan conocida clientela, a través de transacciones donde se intercambiaban votos por la satisfacción de necesidades básicas que el Estado nunca suplió, como servicios públicos, educación, vivienda, alimentación. Una herramienta que posibilitó la expansión y el arraigo de tal fenómeno en la cultura política del país fueron los llamados auxilios parlamentarios, dineros del erario otorgado a los miembros del Congreso, quienes podían utilizarlo para “invertir en el desarrollo de sus regiones”; sin embargo, estos recur-

sos administrados de manera personal, sólo sirvieron para que los políticos regionales tuvieran el margen para garantizarse su reelección como parlamentarios y, con ello, acceder al conjunto de la burocracia central y de provincia.

Como puede observarse, el panorama político nacional para los años setenta puso de manifiesto un sistema de partidos débil<sup>4</sup>, una democracia excluyente y un Estado ausente frente a la regulación de los conflictos y a la creación de un modelo de desarrollo nacional que permitiera la satisfacción de las necesidades de la población, cuyo resultado será una cultura política creada y amparada en el uso de recursos como la clientela, la corrupción y la exclusión. De esta manera, la ilegalidad se fue adhiriendo a más y más prácticas que la sociedad legitimó e incorporó a sus percepciones sobre el régimen político colombiano.

3 Es larga la lista de facciones y subfacciones que se crearon por las disputas internas en cada uno de los partidos, sobre todo en los periodos electorales.

4 Cuando utilizo el adjetivo débil como una de las características de nuestro sistema de partidos, lo hago no para negar la existencia de partidos políticos, ni de la baja capacidad de maniobra en el espectro político de estos, sino para señalar que sus dinámicas y, sobre todo, las que produjo el periodo del Frente Nacional, terminaron borrando las frágiles fronteras ideológicas y programáticas que habían entre liberales y conservadores, hasta el punto de que pueda llegar a hablarse de que el Frente fue un régimen de partido único, lo cual debilita el sistema, puesto que este necesita de la contradicción, la oposición y el control para forjar un régimen democrático propiamente moderno.





## Del ocaso del bipartidismo al auge de las microempresas electorales

El fin del Frente Nacional no sólo irrumpió con los vastos problemas nacionales contemporáneos: la debilidad del Estado, el conflicto armado, la exclusión económica, política y social, el atraso económico regional, la cultura de la ilegalidad, el narcotráfico, sino, en especial, con la ilegitimidad del bipartidismo. No obstante, esta ilegitimidad fue utilizada hábilmente por las nuevas élites regionales, quienes fueron las más favorecidas por la fragmentación interna de los partidos al obtener poderíos al margen de jefaturas centrales y emerger así al plano nacional acuñándose a través de movimientos y organizaciones políticas autoproclamadas como independientes o alternativas, no obstante, sus prácticas siguieron siendo las mismas del legado tradicionalista. Por otra parte, también se forjaron movimientos y organizaciones que intentaban recoger y expresar tendencias políticas excluidas por completo en los años anteriores, pero una opción armada extendida y cimentada en las regiones, terminó presentándolas como opciones débiles en el ámbito democrático, lo que las puso en la

mira de los ataques de diferentes frentes de confrontación.

Este ocaso del bipartidismo<sup>5</sup> a través de la atomización de pequeños movimientos y organizaciones políticas, por lo general creadas para vísperas electorales, no supuso la ampliación de la democracia sino la consolidación de prácticas como la clientela, la corrupción y la exclusión, a través del levantamiento de fuertes poderes locales que se tomaron el poder central, lo cual, se vuelve aún más problemático porque en la región se concentra la mezcla entre conflicto armado, pobreza, corrupción y narcotráfico.

Este panorama se avizó con más fuerza con la descentralización y la elección popular de alcaldes y gobernadores (1988), medidas que paradójicamente buscaban cerrarle el paso a la clientela política y ampliar las posibilidades de desarrollo e inversión regional<sup>6</sup>. De hecho, las nuevas medidas lo que finalmente consiguieron fue consolidar microempresas electorales y clientelas locales, incluida la pavorosa clientela armada y criminal, pues la administración directa de los recursos se convirtió en el caldo de cultivo para la presión de grupos armados ilegales.

5 Aunque esta atomización de movimientos, organizaciones y “partiditos” fue evidente en la política regional y, la Constitución del 91 ayudo a consolidarla, es importante señalar que la fuerza del bipartidismo para ganar elecciones de orden nacional se mantuvo hasta las presidenciales de 2002, cuando por primera vez, gana la Presidencia de la República un candidato que se presentaba como representante de estos nuevos “partiditos”.

6 Antes de ser aprobada la medida de elección popular, estas autoridades locales eran nombradas por el Ejecutivo.



les, la expansión de la corrupción y del narcotráfico.

De esta manera, las nuevas clases políticas regionales separadas de los antiguos caciques políticos nacionales se mantienen en el poder a través de movimientos, organizaciones o pequeños partidos que se creaban de manera circunstancial (en periodos electorales) accediendo a él por la vía de la clientela y, en algunos casos, de la asociación con grupos armados ilegales cuyos principales propósitos estuvieron dirigidos a controlar los recursos públicos con fines de corrupción. Esto se convertiría en un arma de doble filo para nuestro régimen político pues, por un lado, estos poderes locales se fortalecen económicamente en desmedro de los derechos de sus poblaciones y obtienen mayor capacidad de acción para incidir en la política nacional y, por otro, la fragilidad de la acción del Estado le cede lenta y eficazmente su campo a organizaciones armadas ilegales y al narcotráfico, quienes se fortalecen y expanden apelando a vacíos y vicios institucionales. Es así como el uso de la violencia emerge trascendentalmente en este espectro político y económico regional, donde el clientelismo armado y criminal suplanta al político, fenómeno de captación por medio de la presión armada de los recursos públicos, las administraciones locales y regionales, los cuadros políticos y las bases sociales en beneficio de proyectos armados o de “capitalistas parias”<sup>7</sup>.

Si el Frente Nacional había logrado detener la lógica de la confrontación armada y violenta que utilizaron los partidos tradi-

cionales para saldar sus contradicciones en el ámbito político y económico desde los tiempos de la Violencia, el nuevo régimen postbipartidista favorece su nuevo auge, primero con la aparición de múltiples guerrillas y luego con la aparición de la mano corruptora de la economía del narcotráfico, que erige a su alrededor diversos tipos de organizaciones armadas delincuenciales, dispuestas a enfrentarse a los poderes económico y político nacionales desde el dominio que lograron establecer en las regiones de una manera muy eficaz y eficiente, puesto que a través de dinero y armas, ganaron todo tipo de lealtades y respaldos a su favor.

### **Violencia, clientela y corrupción: un escenario para narcodemocracia**

La precariedad de nuestro régimen político le impidió al país dirigirse al escenario donde el Estado se constituye en el actor que arbitra los conflictos, cuya promoción del desarrollo descansa en la erección de un mundo público caracterizado por la realización de los derechos de sus ciudadanos y cuyas relaciones sociales están atravesadas por principios como la igualdad y la inclusión. Esta precariedad también fue el resultado de un lento y pobre desarrollo económico nacional y de esas

<sup>7</sup> El término “capitalistas parias” es tomado de Marco Palacios, quien lo acuña para referirse al proyecto económico del narcotráfico y su nefasta influencia en la vida económica y política del país.



relaciones asimétricas que entre el centro y la periferia hicieron de las regiones lugares aislados y olvidados.

La ausencia de políticas de desarrollo nacional que lograran establecer un modelo económico sostenible y elevara los niveles de vida de la población hacia la satisfacción de sus derechos económicos y sociales no sólo se manifiesta en la imposibilidad de forjar una industria moderna conectada con el capital internacional sino en la relación de las urbes con las regiones, la cual puso a éstas en desmedro de las primeras, contribuyendo al continuo sometimiento que la región en Colombia ha tenido que enfrentar por el atraso, la pobreza y la violencia. La política tradicional encontró en la periferia el terreno apropiado para obtener prebendas electorales a cambio de “los beneficios del desarrollo”; de esta manera, los dirigentes políticos liberales y conservadores utilizaron los recursos públicos como mecanismo para garantizar la lealtad electoral de los políticos regionales.

El gran eje económico sobre el que gira el país por lo menos hasta la década de los ochenta es el café, el cual se constituye en su principal fuente de ingresos, en el medio para la modernización de diferentes regiones especialmente sobre la cordillera Central y, en el medio para fortalecer determinados sectores comerciales y de servicios. No obstante, la primacía del café también promovió la monodependencia, favoreció el rezago de otros sectores productivos, entre ellos, los de otros renglones agrícolas y los de recursos minerales y energéticos.



No obstante, pese a que desde los años sesenta se implantó un modelo decidido en la sustitución de importaciones, con el cual se pretendía proteger y fomentar la industria nacional, el país no pudo desvirtuar su condición histórica de exportador de materias primas e importador de bienes manufacturados y de tecnologías. Las medidas aperturistas de mediados de los años setenta apuntaron a reinventar el modelo económico, pero éste prácticamente se vino al fracaso en menos de un quinquenio, en buena medida por una penetración masiva de capitales legales e ilegales que empezaron a inflar la economía nacional.

Las nuevas dinámicas económicas –ya no netamente agrarias– así como la creciente corrupción del régimen político sobreviviente al Frente Nacional, construyeron una burocracia propicia para el delito, tanto más en cuanto el sistema de alianza y reparto perseverante impidió el control mismo de la administración. La población nunca tuvo acceso real a los beneficios de este precario desarrollo y, cuando lo arañó, fue a cuenta gotas y casi siempre sin acceder a él por las vías de la redistribución –acción propia de los Estados–,





es decir, no asociándolo a la conquista de derechos, sino al recibo de favores. Con esto, se abrió el espectro para que al lado de la clientela prosperaran rápidamente el contrabando y la economía informal, pues por un lado, existían unas precarias condiciones económicas de la población en general para acceder a bienes y servicios y, por el otro, la corrupción administrativa amplió su radio de acción hacia los nuevos sectores de la economía nacional, incluso hasta extenderse a las actividades ilícitas.

La confluencia entre el ascenso del contrabando y el ensanchamiento de la corrupción le abrió la puerta al tráfico de alucinógenos, en primera instancia de marihuana y casi al mismo tiempo de la cocaína, tráfico que inicialmente estaría soportado en redes organizadas de la ilegalidad con presencia, articulaciones o vínculos en los distintos órdenes de la vida social, política y económica del país, hasta convertirse en grandes carteles y, hoy estar consolidadas como verdaderas mafias.

De esta manera, vemos que el auge de la economía del narcotráfico no sólo fue posible por los vínculos que desde el principio tejieron miembros del establecimiento con la delincuencia y la corrupción, sino que su consolidación también estuvo acompañada y soportada por éstos, hasta el punto de perder toda su capacidad de dominio ante una nueva clase o elite delincencial que se forjaría en el ámbito regional, cuyo poderío, soportado en el tráfico ilícito de drogas y en el uso de la violencia lograría influir en los designios de la nación.

---

**L**a confluencia entre el ascenso del contrabando y el ensanchamiento de la corrupción le abrió la puerta al tráfico de alucinógenos

---

En otras palabras, las dinámicas de la aquí descrita política tradicional, configuraron un sistema económico, un régimen político y una sociedad propensos al asocio y al uso de la ilegalidad, una casa de puertas abiertas para el desarrollo de una economía del narcotráfico y para la penetración de este en la política y la cultura colombianas, por varias razones: 1. Por la imposibilidad de forjar un modelo económico garantista de derechos que lograra integrar a las regiones en torno al ideal de desarrollo nacional. 2. Por el deterioro que el régimen del Frente Nacional generó sobre el sistema de partidos, aumentando sus divisiones internas en torno a personalismos y desdibujando en el ámbito nacional la posibilidad de que emergieran propuestas políticas alternativas con oportunidad de entrar, con las mismas condiciones, en el juego político. 3. Por el dualismo centro-región forjado desde la política y la economía, que erigió unas élites regionales que, inclinadas al uso de la violencia y de la clientela, tuvieron cada vez mayor autonomía frente al poder central. 4. Finalmente, porque esta erección de una democracia limitada y banalizada se soporta con la cultura del favor, el rebusque y la tajada (ciudadanía desdibujada).





## Del negocio del narcotráfico a la empresa política mafiosa

Como ya se ha señalado, contrabando, corrupción y delincuencia organizada son los antecedentes – a veces no presentados de manera evidente- del desarrollo del narcotráfico como un negocio a gran escala. No obstante, “[...] suele atribuirse a los marimberos, traficantes de marihuana de la Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, el protagonismo como los pioneros de las drogas en Colombia. Ciertamente sus excesos y ostentación en los barrios de clase alta de las ciudades caribeñas hicieron imposible que no llamaran la atención del resto de la sociedad, que presenciaba, más con curiosidad y oportunismo que con preocupación, el nacimiento de una clase emergente. Sin embargo, la extravagancia de los marimberos ha opacado el papel superior que desempeñaron los contrabandistas y delincuentes de Antioquia y Valle del Cauca y los patrones de las esmeraldas en la construcción de los grandes carteles de la cocaína”<sup>8</sup>.

En un principio, el negocio de la cocaína comenzó por la consecución de la materia prima en otros países para ser procesada al interior de Colombia y ser enviada al mercado ilícito de los Estados Unidos –para lo cual se necesitó el respaldo o la connivencia de autoridades de aduanas y de control fronterizo-, hasta que los altos recursos provenientes del negocio le permitió a los traficantes ampliar su espacio en la cadena productiva a través del control territorial para la siem-



bra de la hoja de coca, la construcción de grandes laboratorios y de pistas para la comercialización.

No obstante, para entender cómo la economía del narcotráfico logró constituir toda una clase delinencial emergente en las regiones, con la capacidad de cooptar, penetrar y confrontar las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales del país, es necesario, no perder de vista las dinámicas que dieron base a las causas estructurales del mismo: 1. La erección de un Estado precario, ausente en vastos lugares del territorio nacional y con grandes fallas frente a su papel de árbitro de los conflictos y regulador de las dinámicas sociales y económicas 2. La cimentación de una cultura del patronazgo y la clientela, la cual establece unas relaciones caracterizadas por la lealtad, el favor y la intermediación y; 3. La constante reinención del uso de la violencia como mecanismo para la tramitación de los conflictos, la expansión de poderíos territoriales y el control de las poblaciones. Estas

<sup>8</sup> Gustavo Duncan. Los señores de la guerra. De paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia. Bogotá: Editorial Planeta, 2007, p. 213.



causas cultivarían el terreno fértil para que una sociedad con grandes problemas y crisis económicas y políticas, lograra inclinarse fuertemente hacia la cultura de la ilegalidad, que aún hoy, lamentablemente se reinventa para mantenerse como fuerza movilizadora de los designios del país.

### Grupos, redes, carteles

Como se ha indicado, el negocio del tráfico de drogas ilícitas empezó con pequeños y disgregados grupos que importaban la pasta de coca de países andinos como Perú y Bolivia; sin embargo, el acceso al mercado estadounidense, el manejo de rutas y de contactos para la comercialización de la cocaína dentro de las ciudades del norte, sólo la tenían un número reducido de organizaciones, lo cual les otorga una posición superior en la cadena delictiva, no sólo frente al poder de organizar redes delictivas, sino de captar el grueso de dinero que el negocio dejaba. Esta dinámica logra establecer prontamente supremacías de unos grupos frente a otros; asimismo, la conquista de autoridad conduce a los grupos dominantes a constituir organizaciones armadas de distintos niveles<sup>9</sup>, con las cuales hacer respetar sus decisiones y la regulación del negocio.

Es así como a finales de los años setenta se pueden encontrar los principales grupos de traficantes en la geografía nacional: algunos en Medellín –entre los que se encuentra el que finalmente se impondría: el de Pablo Escobar-, algunos en Cali –de los cuales el de los Rodríguez

Orejuela y Santacruz emergerían sobre los demás, en el Eje Cafetero, con la organización de Carlos Ledher; en el centro del país, con Gonzalo Rodríguez Gacha a la cabeza; en otras latitudes, como los grupos del norte del Valle, en la costa Caribe, los llanos orientales y el sur del país.

Pese al incremento de la violencia que las organizaciones armadas de estos grupos desencadenaron y a los altos recursos económicos que lograban obtener, parecía que su criminalidad y ostentación pasaban de agache frente a los gobiernos de turno; incluso la administración de López Michelsen (1974-1978) establece mecanismos cambiarios con los que los empresarios de la droga pueden acceder a reintegros anónimos de dólares a través del Banco de la República, lo cual se convierte en una herramienta favorable para el lavado de activos de muchos narcos.

De esta manera, se empiezan a configurar los grandes carteles de la droga: a

9 Como lo han señalado Krauthausen y Sarmiento, la cadena productiva del narcotráfico contiene unas etapas en las que participan actores de muy diversos tipos, desde el campesino “raspachin” hasta el capo que comercia y tiene dominio sobre rutas y redes de distribución. Esto indica que es un negocio en el que las ganancias pueden generar arduas disputas, dado que la regulación de las transacciones es impuesta por quien tenga el más alto poder en la cadena y, este se obtiene garantizando la comercialización del producto y el lavado de los dineros ilícitos. Por ello, al lado del levantamiento de esta empresa, se forjaron aparatos armados también de distintos niveles, la idea era contar con un mecanismo que sirviera para la protección y la expansión del negocio, así como para el sometimiento de otros grupos. Ver: Ciro Krauthausen y Luis Fernando Sarmiento. *Cocaína & Co. Un mercado ilegal por dentro*. Bogotá: Tercer Mundo Editores y Universidad Nacional de Colombia, 1991.





través del control cada vez más avasallante de pequeños grupos, de las rutas y los corredores para la exportación de la cocaína, lo que les otorga la autoridad para someter a procesadores y pequeños exportadores, pues la fase más complicada y riesgosa del negocio es, precisamente, la fase final de envío y comercialización en el mercado de Estados Unidos y a menor escala de Europa, así como la del “blanqueamiento” de los dineros obtenidos; quien controlara esta fase, tenía la capacidad de imponerse sobre los demás.

Así terminaron por sobresalir los grupos de Pablo Escobar y los Ochoa Vásquez en Medellín, de Rodríguez Orejuela en Cali, de Rodríguez Gacha en Bogotá y de Carlos Ledher en ciudades intermedias como el Quindío y Pereira, dando origen a lo que conocemos como los carteles de la droga, puesto que estos grupos no sólo llegaron a controlar todas las fases de la producción, la comercialización y lavado de activos, sino que cimentaron organizaciones armadas con mandos claramente

identificados que soportaron su expansión y el mantenimiento de sus dominios.

Como puede observarse, el anclaje de los principales mandos de los carteles de la droga se ubica en los principales centros urbanos del país y en ciudades intermedias más no en las regiones; buena parte de la explicación radica en que dado que el éxito del negocio se encuentra en la exportación de la cocaína, eran las dinámicas urbanas las propicias para desarrollar maniobras de comercialización internacional del producto, esto es, contactos para la creación de todo un corredor internacional, contactos con fines de corrupción de autoridades policiales, fiscales, de aduanas y de control fronterizo, creación de economías que permitieran el lavado de activos y el testaferrato y, soporte tecnológico de telecomunicaciones, por su parte en las regiones se cimentaban contactos, organizaciones armadas al servicio del narcotráfico, regulación de las fases de producción.

Así, ya a comienzos de los años ochenta las bandas narcotraficantes disfrutaron de las bonanzas de la cocaína y, lograron alcanzar altísimas sumas de dinero que les permitieron influir en la vida económica y luego política del país. No obstante, el nacimiento de estas nuevas élites de gustos ostentosos y pocos escrúpulos para someter, comprar o quitar del camino a quienes se interpusieran en sus actividades ilícitas, condujo a una confrontación entre estos y algunas élites del poder central. Cuando el poder de los narcos empezó a estrecharle el camino a algunos sectores del establecimiento, reacios a ceder o dejarse deslum-



brar por las vastas fortunas, le declararon la guerra al narcotráfico y se decidieron a perseguir a los principales capos así como a todos sus negocios y redes de corrupción y delincuencia<sup>10</sup>.

Pese a ello, el narcotráfico no sólo contaba con grandes tentáculos (económicos y armados), sino con toda una cultura proclive a la ilegalidad, al patrocinio y al favor, es decir, con reales posibilidades para entrar y establecerse con plena facilidad en las instituciones colombianas y, así lo hicieron: cada uno marcó tendencias diferentes frente a la forma de insertarse en la vida económica, política y social del país, pero su objetivo siempre fue el mismo: incidir en las decisiones políticas que les permitieran proteger a toda costa su actividad ilícita.

## Confrontación y cooptación

El punto determinante que dio inicio al conflicto entre el gobierno y los carteles de la droga fue la extradición. Al interior del país, los narcos ya habían configurado toda una “cadena de aseguramiento” de sus actividades ilícitas, la cual iba desde el soborno, la infiltración y el asesinato hasta el lavado de activos. Sin embargo, para los narcos la idea de ser extraditados y juzgados en Estados Unidos se convirtió en un elemento que realmente los perturbó, por ello sus estrategias estuvieron dirigidas a detener esta apuesta de algunos miembros del establecimiento que, para ellos representaba una fuerte amenaza.

En 1979 Colombia firmó junto con Estados Unidos un tratado de extradición

que sería ratificado años después. Sin embargo, los gobiernos de Turbay Ayala y de Betancur, en un comienzo, fueron reacios o tímidos para hacer efectivas las solicitudes de extradición hechas por el gobierno estadounidense. Mientras tanto, las principales organizaciones de la droga, atentas a las amenazas de persecución, entablaron toda una serie de estrategias para limitar e impedir decisiones que desde el Estado se pudieran tomar en su contra – entre ellas, principalmente la extradición que estaba vigente.

Algunos capos optaron por insertarse directamente en la política, otros por su parte, prefirieron hacerlo a través de la infiltración y la cooptación, estas dos grandes tendencias marcarían la guerra abierta y los escándalos que le mostrarían al país, hasta donde la debilidad de nuestro régimen político se había forjado en torno a bases demasiado propensas a cohabitar con la ilegalidad, las cuales dejarían el legado de violencia que hasta hoy sigue sufriendo el país.

La primera gran tendencia la encabezan capos como Pablo Escobar Gaviria y Carlos Ledher Rivas, quienes optaron por vincularse directamente a la política; la segunda, estará liderada por los principales líderes del Cartel de Cali, quienes prefirieron el manejo de la política

<sup>10</sup> No hay que dejar de señalar que esta actitud de algunos miembros del establecimiento en contra del narcotráfico, también se debió –y en gran medida-, a la presión ejercida por los Estados Unidos y sus políticas antidrogas para Colombia.



desde “afuera”, a través de la compra de políticos, jueces y toda clase de funcionarios.

### “Hacer política por nuestra propia mano”

Cuando los capos del narcotráfico decidieron incursionar en política tenían una ventaja comparativa frente a los grandes partidos liberal y conservador y, frente a los nuevos movimientos y organizaciones políticas: poseían grandes fortunas con las cuales cautivaron fácilmente a sus electores. En otras palabras, la cultura política forjada desde el bipartidismo había dejado como referentes de la esfera política, prácticas ya descritas como la clientela, la corrupción y la violencia, lo cual determinaba que el éxito electoral no se cimentaba en las ideas sino en el dinero y, era precisamente esto último, lo que el narcotráfico lograba imponer frente a otras élites en el país. Con este referente claro sobre la forma como históricamente se había hecho y se hacía política, los capos logran insertarse en movimientos políticos o crear unos propios, a través de los cuales captarían bases sociales para sus beneficios electorales optando por varios objetivos: lograr consolidar respaldos populares, obtener y ampliar el dominio de regiones copadas por viejas castas políticas o sensibles a movimientos sociales y armados de izquierda, conseguir espacios políticos que les permitieran incidir en las agendas gubernamentales, entre ellas, en las políticas de lucha antinarcóticos que incluían el tema de la extradición.



De esta manera, Pablo Escobar creó propuestas como *Civismo en Marcha* y *Medellín Sin Tugurios*, movimientos por medio de los cuales empieza su incursión en la política a través de la construcción de obras sociales, entrega de dinero y de mercados en los barrios marginados de Medellín. Escobar logra vincularse a una facción disidente del Partido Liberal, el Nuevo Liberalismo, del cual fue expulsado por mandato directo de la joven promesa Luis Carlos Galán Sarmiento. De allí, pasa a ser parte del movimiento dirigido por Alberto Santofimio Botero, Renovación Liberal, por medio del cual es elegido representante suplente a la Cámara de Representantes en 1982. Con esta elección Escobar consigue obtener una visa para el ingreso a los Estados Unidos, así como la inmunidad parlamentaria, figura que le garantizaba beneficios en caso de llegar a ser detenido por la comisión de un delito (la figura contemplaba que un parlamentario si no era encontrado en flagrancia sólo podía ser capturado 20 días antes y





40 después de las sesiones del Congreso, y estas se prolongan por medio año). Escobar para entonces contaba con pocos pero perseverantes opositores, entre ellos el Ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, quien emprendió una fuerte persecución judicial contra el capo, que lo llevaría a perder su investidura como parlamentario y le daría uno de los más fuertes golpes que el establecimiento propiciaría sobre los carteles en la década de los ochenta: la incautación y destrucción de *Tranquilandia*, uno de los laboratorios más grandes del capo, ubicado en la sabanas del Yarí.

Mientras Escobar se vinculaba directamente en la política, su antiguo lugarteniente y ahora socio, Gonzalo Rodríguez Gacha, plantearía una vía alterna: la penetración en movimientos provinciales y locales que, por medio de asociaciones cívicas o gremiales, estaba decidido a imponer hegemonías parroquiales con capacidad de acabar con la cada vez más intensa presión de la guerrilla. Fue así como Gonzalo Rodríguez Gacha le ofreció a estas asociaciones cívicas o gremiales el apoyo logístico y militar suficiente para exterminar no sólo a la guerrilla, sino para

acabar con cualquier representación de la izquierda liberal, del antiguo MRL, de la ANAPO, del MOIR y del PCC. Aunque Rodríguez Gacha defendió su postura como anticomunista, ella distaba de cualquier ideología y estaba más afectada por la oposición que le hicieran las FARC, particularmente Jacobo Arenas, a su pretensión de extender cultivos y laboratorios en zonas de influencia del grupo guerrillero. Gacha habría de extender su práctica de eliminación sistemática a mediados de los años ochenta a la naciente Unión Patriótica, partido que surgirá de los acuerdos de paz suscritos entre el gobierno Betancur y las FARC.

Mientras estas eran las aventuras de Escobar y de Gacha, en el eje cafetero hacía de las suyas Carlos Ledher, quien había creado el Movimiento Latino Nacional (MLN), cuyas bases sociales eran atraídas a través de la entrega de dinero y mercados en jornadas que se denominaban “sábados patrióticos”, donde el capo elevaba consignas de corte racista, regionalista y nacionalista en aparente defensa de los intereses parroquiales, pero sobre todo en contra de la extradición. A diferencia de la apuesta política de Pablo





Escobar, quien estuvo cercano a las huestes liberales, adhiriéndose primero a una facción muy reconocida y luego forjando una propia, la de Ledher se dirigió hacia la creación de su propio movimiento político, desde el cual rechazó los vicios de la política tradicional en su región e intentó fabricar unos principios ideológicos. No obstante, la idiosincrasia de un capo del narcotráfico que se aventuraba a hacer política por su propia mano, sólo podía traer como resultado una organización que, pese a criticar la corrupción y la clientela, apeló a ellas desde el principio para captar electores y seguidores y, de igual forma, sus idearios políticos e ideológicos eran más una amalgama de distintas tendencias y posturas que le servían para oponerse abiertamente a la extradición, que una verdadera propuesta política y programática. Es así como en torno al MLN podía encontrarse una inclinación abierta hacia el nazismo, se enarbolaban las banderas del anticomunismo, pero a la vez, las del antiimperialismo y hasta las del proyecto bolivariano.

Las propuestas de Ledher no sólo eran difundidas por el trabajo de los “sábados patrióticos”, sino que él mismo se encargó de crear una fuente de masiva difusión: el periódico *Quindío Libre*, por medio del cual proponía y justificaba prácticas como la limpieza social, criticaba la extradición, el clientelismo y la corrupción de la política tradicional, desdeñaba del comunismo, pero a la vez, paradójicamente, manifestaba solidaridad con los grupos guerrilleros y se proclamaba gaitanista. Con todo esto, el MLN logró conseguir en la

elecciones departamentales de 1984 dos diputados a la asamblea y más de diez concejales en el Quindío. El dinero del narcotráfico sirvió para conseguir electores, los cuales fueron cautivados a través del reparto de dinero y regalos, incluso los principales líderes que se adherían al Movimiento devengaban un sueldo.

No obstante, estas iniciativas terminaron por volverse en contra de los capos, pues sus pretensiones de insertarse directamente en la política con el ánimo de conseguir márgenes de maniobra en el establecimiento, los puso en la mira del mismo, haciéndolos vulnerables a la persecución del Estado. Esto no sólo generó que los narcos salieran por la puerta de atrás de sus movimientos políticos, sino que se internaran en la clandestinidad y usaran otro tipo de herramientas, ya no únicamente para infiltrarse en las instituciones –lo cual venían y siguieron haciendo– a partir del soborno y compra de funcionarios de distinto rango, sino a través de una guerra abierta contra el Estado, liderada por Escobar, para quien el detonante lo había marcado la fuerte oposición y persecución ejercida por el entonces Ministro Lara Bonilla, quien desenmascararía los orígenes delictivos del capo y le asestaría un fuerte golpe a sus estructuras delincuenciales, tal como lo fue la “Operación Tranquilandia” al mando del Coronel Jaime Ramírez Gómez, guerra que empezaría, precisamente con sus asesinatos en el año de 1984.

A partir de ese momento, la violencia iría en aumento. La guerra declarada entre el Estado y capos del narcotráfico







—principalmente Escobar y Gacha—, estuvo caracterizada por la activación del uso de la extradición por parte del Estado y, del uso sistemático de la violencia y el terror por parte de los narcos, cuyo fin era intentar someter al establecimiento a sus condiciones. De esta manera, el país vive toda una oleada de secuestros, asesinatos, bombas y magnicidios, en una estrategia trazada por los principales barones de la droga que lograría soportarse y ejecutarse, gracias a los grupos armados, que desde sus inicios tejieron y, que serían los inicios de las hoy conocidas bandas paramilitares.

### **“Poner la política a nuestro servicio”**

Por su parte, los líderes del otro gran cartel de la droga (el de Cali), conscientes también de que la persecución judicial, policial y fiscal que el Estado colombiano había emprendido en contra del narcotráfico los vinculaba igualmente a ellos, idearon

un plan de acción que les permitiera hacerle zancadilla a las pretensiones del gobierno y les permitiera conservar cierta capacidad de maniobra para que el negocio no se viniera abajo. Esta fue una decisión que contaba con las mismas intenciones que fundamentaron la tomada por Pablo Escobar, Rodríguez Gacha y Carlos Ledher, pero con una radical diferencia: el tipo de estrategia a utilizar.

Para los Rodríguez Orejuela, José Santacruz y Helmer *Pacho* Herrera, el punto estaba no en vincularse a la política de manera directa, sino en utilizar las estructuras políticas vigentes y con fuerza en el establecimiento para su beneficio. Por ello, decidieron acercarse a las huestes del Partido Liberal y lo consiguieron de manera vertiginosa a través de la compra de toda clase de políticos, comprometiéndolos de esta forma con el narcotráfico para así, terminar sometiéndolos a sus propósitos. Para los capos del cartel de Cali el uso de la violencia y el terror fue una herramienta poco factible para el buen desarrollo de su estrategia, esto se debió en parte a que la forma como se cimentó dicha organización, distó de otras como la de Medellín, Bogotá y el Eje Cafetero. Su carácter era mucho más empresarial, soportándose en la vinculación a negocios y empresas legales como los deportes, la banca y la construcción y con la creación de las propias (entre las que se destaca Drogas La Rebaja), por medio de las cuales, lograron insertarse en las dinámicas de la vida económica, obtener contactos y reconocimiento, así como blanquear sus activos ilícitos.



Incluso los alejados caminos que las dos organizaciones más grandes de la droga habían tomado para librar una misma batalla, terminó por enfrentarlos a muy altos costos. Desde un comienzo, cuando se empiezan a configurar los carteles de la droga, se inicia una pugna de unos líderes sobre otros, cuyo propósito era que sólo un gran eje se impusiera y controlara la totalidad del negocio. Es así como Pablo Escobar comienza su avanzada, apropiándose de rutas y gravando impuestos a otros capos, señalándoles que los cabecillas del cartel de Medellín serían los únicos jefes, ante lo cual terminan accediendo Gonzalo Rodríguez Gacha y Carlos Ledher, mientras que, por su parte, los cabecillas del cartel de Cali optan por distanciarse y conservar su autonomía, lo que termina constituyéndose en el primer paso de un enfrentamiento a muerte<sup>11</sup>.

Esta pugna no sólo desemboca en una guerra interna del narcotráfico que produce atentados entre unos y otros, sino en el rechazo explícito del cartel de Cali a la oleada terrorista de Pablo Escobar, que lo lleva incluso a aliarse con el establecimiento para lograr vencerlo. Durante una indagatoria que rindió años después Miguel Rodríguez en la Fiscalía, a mediados de abril de 1999, cuenta que ellos colaboraron en los operativos de búsqueda de Pablo Escobar y sus lugartenientes, y que de esa participación siempre estuvieron enterados los presidentes Virgilio Barco Vargas y César Gaviria Trujillo: “[...] Las autoridades calculan que en la última fase de la persecución contra Pablo Escobar, el cartel de Cali invirtió cerca de 120 millo-



nes de dólares en compra de tecnología, pago de informantes y sobornos a miembros del DAS, la Fiscalía, la Procuraduría, la Policía y el Ejército”<sup>12</sup>.

El distanciamiento del uso de la violencia como mecanismo para aplacar la extradición, obtener inmunidad judicial y proteger los dineros obtenidos, no radicaba únicamente en el diseño de una estrategia que les permitiera penetrar a fondo y sin mayores ruidos a todo tipo de instituciones para ponerlas al servicio de los intereses de los capos; también era una decisión calculada que les permitía no tener otro tipo de cargos como homicidio o secuestro, así como mantener a sus familias protegidas de todo tipo de persecuciones. Con ella, lograron mantenerse por más tiempo en el negocio, obviar la justicia colombiana y las solicitudes expresas de extradición; también les sirvió

11 Chaparro, Camilo. La historia del cartel de Cali. El Ajedrecista mueve sus fichas. Intermedio Editores, Bogotá, 2005, pp. 212-213.

12 Ibid, pp. 202-203.





para derrotar a sus enemigos del cartel de Medellín, pero, finalmente, nunca ganaron la guerra. Pese a que tenían serias pruebas que habían conservado para garantizar que los políticos no los traicionaran, terminaron siendo sometidos por la justicia.

Tal vez la evidencia más explosiva de la estrategia seguida por el cartel de Cali fue el *Proceso 8000*. No obstante, existen serias pruebas de los vínculos que la mafia logró establecer con distintas instituciones políticas, militares, judiciales, económicas y sociales, entre ellas, las que llevaron hacia la declinación de solicitudes de extradición (incluso la claudicación misma de la extradición en la Asamblea Constituyente de 1991, que de entrada les advertía a los capos que habían ganado la guerra). En el año de 1984, Gilberto Rodríguez Orejuela y Jorge Luis Ochoa fueron detenidos y enviados a prisión en España, allí estuvieron por cerca de trece meses, tiempo durante el cual el gobierno de los Estados Unidos, solicitó su extradición por cargos de tráfico de cocaína hacia ese país. No obstante, pese a que tras el asesinato del Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, el gobierno de Belisario

Betancur reaccionó ante el hecho con la reactivación de los tratados de extradición con los Estados Unidos, no atendió la solicitud expresa por ese gobierno sobre el caso de Rodríguez y Ochoa, sino que solicitó a España su extradición hacia Colombia, sobre la base de supuestos procesos judiciales que los capos tenían pendientes en Colombia. “Aparentemente el expediente fue fabricado para evitar que las autoridades españolas lo enviaran a los Estados Unidos. El cartel de Cali habría pagado un millón de dólares a varios funcionarios del ministerio de Justicia para que aceleraran y presionaran los trámites de extradición”.<sup>13</sup>

Frente a la presunción sobre su incidencia en la caída constitucional de la extradición en la Constituyente de 1991, el camino recorrido había sido bastante largo. Por un lado, es obvio que los capos se dedicaron a “apoyar” a distintos políticos regionales para su carrera política en el Congreso, y que de esta manera, adquirirían serios compromisos con los barones de la droga, de lo cual se puede establecer que entre ellos, se encontraba obstaculizar la extradición, por otro, cuando se aprueba la Constituyente, es inevitable pensar -pese a análisis que señalan que la prohibición de la extradición de nacionales consignada en la Carta del 91 es resultado de la presión de la guerra forjada por el narcotráfico contra el Estado y la sociedad, que hizo finalmente que

13 Ibid, p. 187



el problema se asumiera como un asunto interno y, que así meritaba ser solucionado- que los tentáculos del narcotráfico no se hubieran dirigido a la compra de dirigentes políticos para que lograran su participación en la Asamblea a cambio de tumbar dicha figura.

## Finalmente todos perdieron la guerra

Las intenciones de Pablo Escobar y otros miembros del cartel de Medellín por participar directamente en la política, se convirtieron no sólo en su principal error, sino en su principal motor para declarar una guerra a muerte al Estado colombiano, así como con el cartel de Cali, que finalmente lo llevaría a su propia destrucción, pues erróneamente, lo que consigue es reunir en su contra todas las fuerzas posibles.

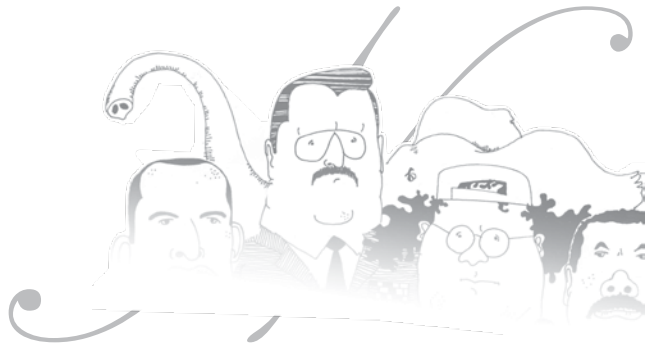
Con la propuesta de sometimiento a la justicia que el gobierno de César Gaviria Trujillo le hizo a los capos del narcotráfico y la nueva Carta Política que le puso fin a la extradición, la guerra que el cartel de Medellín fraguó con tanta brutalidad, logró detenerse. Con la primera se conseguiría la entrega de Pablo Escobar y de algunos miembros del clan Ochoa Vásquez, se vislumbraba así un periodo de transición que intentaba poner fin al conflicto del narcotráfico –por lo menos sometiendo a uno de los grandes carteles de manera pacífica y negociada-, sin embargo, la ambivalencia con que se aplicó la ley de sometimiento y la fuga de Escobar de la cárcel La Catedral luego de un año de su

permanencia allí, revelaron que la capacidad de compra del narcotráfico a miembros de las instituciones del Estado era altísima, pues el capo no sólo seguía contando con los lujos y las extravagancias propias de su estilo, sino que tenía toda su infraestructura delictiva intacta operando desde la cárcel, lo que denotaba una derrota inminente para el Estado.

Tampoco, la posterior persecución y asesinato del capo, puede leerse como una victoria del establecimiento en la guerra que libraba contra el narcotráfico, primero, porque su principal legado es el paramilitarismo, pues como se ha señalado, su muerte se consigue a través de una alianza perversa con el cartel de Cali y los *Pepes* (Perseguidos por Pablo Escobar), lo que le permite, a estos últimos, consolidarse como verdaderos emporios militares con fuerte ascenso de dominación territorial en las regiones y en ciudades como Medellín, quienes, finalmente, se apropian del negocio de la droga y, segundo, porque el cartel de Cali pudo afianzar su estrategia de infiltración de la política colombiana, revelando con una acción determinante: el soborno de todo un gobierno, empezando por el Presidente de la República Ernesto Samper Pizano, que la mafia realmente había asaltado la institucionalidad colombiana.

Con esto, los Rodríguez Orejuela, creían haber llegado a un punto cumbre en el negocio de la droga, pues habían logrado quitar del camino a su principal enemigo, así como alcanzado la más alta infiltración de la política colombiana: tenían un gobierno, con lo que esperaban





obtener un trato más favorable hacia ellos y su inmunidad judicial y fiscal.

Pero tampoco su estrategia de infiltración y alianza con las instituciones les garantizó la victoria. La política antidrogas de los Estados Unidos para el momento ya generaba tal presión sobre Colombia que, termina revelando cómo los tentáculos del cartel de Cali se habían expandido hacia la política y las autoridades colombianas y, de esta manera, explota el conocido proceso de ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña electoral del Presidente Samper, conocido como *Proceso 8000*.

Aunque algunos de los sindicatos fueron juzgados y, en sus procesos judiciales revelaron que el Presidente tenía pleno conocimiento y avalaba la alianza, el poder de compra del cartel de Cali sobre otros miembros del establecimiento, como Senadores y Representantes a la Cámara, puede revelarse en intentos de aprobar leyes favorables para los narcos y sus testaferros<sup>14</sup> –pese al desprestigio del gobierno por el tema- y, en la absolución final del jefe de Estado.<sup>15</sup>

Para los principales capos del cartel de Cali era fundamental que el gobierno

de Samper no se cayera y, de esta manera, siempre negaron los vínculos. No obstante, paradójicamente, es en el marco de este gobierno, cuando empieza su derrota. Por aquellos años, el Bloque de Búsqueda de la Policía, agudizaba la persecución contra los principales cabecillas de la organización, fue así como en el mes de junio de 1995 capturaron en Cali a Gilberto Rodríguez Orejuela y, pocos meses después a Miguel Rodríguez Orejuela, era el resultado, de la presión que los Estados Unidos ejercía con tanta vehemencia sobre un gobierno absolutamente desprestigiado.

Aunque las condiciones de los capos en la cárcel fueron bastante cuestionadas

14 “El 13 de diciembre de 1995 el Senado aprobó, por 56 votos -10 de ellos de congresistas vinculados al 8000- y 32 en contra, un artículo que convertía los delitos de enriquecimiento ilícito y testaferrato en dependientes o subordinados al ilícito del narcotráfico. Es decir, los fiscales y los jueces sólo podrían procesar por estos delitos a los narcotraficantes[...] Gracias a la presión de los medios y la opinión pública, la Cámara de Representantes hundió este misil contra el 8000”. Chaparro, 2005, op cit., p. 108.

15 La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, primero, en diciembre de 1995, casi unánimemente (sólo hubo un voto en contra), decidió no abrir investigación contra el Presidente Samper por supuestos nexos con el narcotráfico y, luego de que la Fiscalía General de la Nación en cabeza de Alfonso Valdívieso, radicara ante ese organismo un expediente que buscaba demostrar la infiltración de “dineros calientes” a la campaña del Presidente y así abrir una investigación formal, la Comisión terminó fallando a favor del jefe de Estado. Ver: El Tiempo, 14 de diciembre de 1995. Política. “Samper no será investigado”, El Tiempo, 15 de febrero de 1996. Política. “Samper está comprometido: Fiscalía 1”, El Tiempo, 13 de junio de 1996. Información General. “Cámara certifica a Samper”.



por los privilegios y la continuación del delito que desde allí fraguaron, es evidente que allí también empieza la caída del gran cartel. Con el transcurrir del tiempo, los capos empiezan a perder margen de maniobra sobre el negocio y, de esta manera, en las regiones se abren múltiples redes que, antaño estuvieron subordinadas al cartel, pero que empiezan a independizarse, precisamente, uno de los más beneficios de esta dinámica es el cartel del Norte del Valle.

Mientras tanto, los cabecillas contemplaban el inicio de su ocaso. Pese a que estaban seguros de maniobrar para pagar condenas cortas (y sobre todo nunca ser extraditados), estas se iban incrementando con nuevos procesos judiciales. Sin embargo, la debacle llegó nuevamente con la amenaza de la extradición del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, aunque el país ya había revivido en 1997 la figura de la extradición, los capos se encargaron de que esta no los afectara a ellos<sup>16</sup>, fue sólo en el año 2003 cuando la justicia de los Estados Unidos afirma dos procesos de extradición en contra de los hermanos Rodríguez Orejuela, que los capos se sienten expresamente amenazados.

A partir de ese momento, se proponen sacar los ases que tanto tiempo guardaron bajo sus mangas. Si bien el *Proceso 8000* les había propiciado varios golpes que menguaron la capacidad de acción del cartel, su maniobra de infiltración, cooptación y compra de todo tipo de instituciones, en especial, de las políticas, les dejaba una larga lista de nexos, vínculos y alianzas que ningún dirigente de la clase



política querría que salieran a la luz. De esta manera, empieza la amenaza y el chantaje a altos funcionarios del gobierno, políticos, miembros de las Fuerzas Armadas y de la rama judicial para que de algún modo le pusieran límites a la extradición. Pese a ello, incluso a la supuesta intermediación del ex presidente Samper, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela fueron extraditados a los Estados Unidos en diciembre de 2004 y marzo de 2005 respectivamente.

Con esto, puede leerse el fin de la guerra contra el narcotráfico a favor del Estado, pero de lejos ha sido así, una nueva generación de narcotráfico y violencia, mucho más anclada a las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales, ya se venía gestando desde tiempo atrás, tan arraigada a nuestra cultura proclive a la

<sup>16</sup> Para este momento la extradición no era retroactiva, es decir, no se aplicaría a delitos cometidos antes de la expedición de la norma.





ilegalidad y la violencia, que pasó desapercibida ante la opinión pública del país.

De manera paralela a la irrupción de los grandes carteles de la droga, el fraccionamiento regional y la imposibilidad de forjar un régimen político y económico capaz de irrumpir democráticamente en la construcción de un Estado moderno, llevaron a que elites regionales, con fuertes legados del clientelismo, la colonización y la violencia, se asociaran y armaran para defender sus proyectos económicos y políticos de la amenaza guerrillera. Con ausencia total o parcial e incluso con el respaldo del poder del Estado, se cimentaron así las bases del proyecto paramilitar, que en principio, se caracterizó por estar afirmado a lo local, erigiéndose como un instrumento de fuerza para proteger los intereses de las castas locales, incluso sometiendo para su beneficio a pequeños campesinos, en la lógica ya bastante arraigada del patronazgo.

Prontamente, las fraccionadas bandas de paramilitares empiezan a ser permeadas por el narcotráfico. El dinero de los carteles, hace del paramilitarismo un instrumento militar ya no sólo para la protección de los intereses particulares de las élites locales, sino de los intereses expansionistas del narcotráfico, el cual le imprime tal cantidad de recursos, que además de convertir bandas en verdaderos ejércitos, es capaz de despojarle a las élites tradicionales de las regiones el control ejercido sobre estos. “En éste proceso entran en crisis los fines de la organización y ésta comienza a transformarse en un sentido en el cual ya no son

los fines los que determinan la organización, sino la organización la que determina sus fines”.<sup>17</sup>

La guerra contra los carteles de la droga nunca gira su mirada hacia este instrumento militar que consolidaba el narcotráfico y que, de manera paralela –mientras los grandes capos observaban su eclipse-, se fortalecía y arraigaba en las regiones, recogiendo el legado de criminalización de la vida social, económica y política que había enseñado el narcotráfico. De esta manera, ya convertido en una fuerte estructura militar, el paramilitarismo dirige su campo de acción hacia la conquista del poder político y económico, para lo cual, se convierte en una organización con un claro objetivo: el sometimiento a su favor de toda la institucionalidad.

De esta manera, desaparecían del panorama nacional los grandes carteles de la droga, es decir, grandes estructuras organizativas con mandos muy establecidos, pero se gestaban múltiples organizaciones que heredan o se apropian de pequeñas fracciones del negocio y, que por su tamaño logran pasar desapercibidas, elemento fundamental, dado que la fuerte persecución que contra los antiguos carteles se libró, puso en evidencia los canales de penetración que el narcotráfico había generado sobre el establecimiento, y hacia de esta estrategia una herramienta

17 Medina Gallego, Carlos. El narco-paramilitarismo. Lógicas y procesos en el desarrollo de un capitalismo criminal. En: Estrada Álvarez, Jairo (ed). Capitalismo criminal. Ensayos críticos. Bogotá, 2008, pp. 110-111.







poco viable para asegurar la continuidad del negocio. Por ello, a los narcos no les queda otra opción que apelar a las estructuras militares que el mismo narcotráfico había financiado y estimulado y, que se habían instalado en las regiones como verdaderas fuerzas para, de esta forma, obtener la protección necesaria y las posibilidades de expansión. Se configura así el paso del predominio urbano al rural de toda la cadena productiva de la droga.

Desde esta perspectiva, buena parte del control de la empresa criminal queda a expensas de quien tiene el dominio territorial y militar para garantizar su mantenimiento, es decir, queda en manos de los ejércitos y grupos armados que operaban en las regiones de manera autónoma.

Por ello, el narcotráfico termina convirtiéndose en un subordinado de las bandas paramilitares, que en su proceso de consolidación, no se interesan sólo por tener cierto control sobre el negocio para recoger dividendos, sino en apropiárselos completamente para revertirlos en la ampliación de ejércitos que les permitirían ejercer un control real y efectivo sobre los territorios, para lo cual, también debían afianzar y ampliar su estrategia de sometimiento de las autoridades locales y, erigirse como poder regulador de las relaciones sociales, políticas y económi-

cas regionales. Es así como el creciente fenómeno paramilitar, “Establece alianzas internas y externas con distintos actores y sectores de la sociedad que van perfilando la complejidad de sus fines. Los narcos se vuelven “paracos” para abrirse camino hacia la legalización, y los “paracos” se vuelven narcos para constituirse en élite económica. Se vuelven socios, y en sociedad y fusión, establecen y fortalecen las relaciones con las élites tradicionales y la clase política en el camino para generar su propio advenimiento en el poder”<sup>18</sup>.

## Una breve conclusión

En últimas, el narcotráfico como proyecto ilícito sí logra asaltar por completo a la institucionalidad colombiana. En manos del paramilitarismo -que cuenta con la connivencia o el silencio del Estado-, es capaz de erigir un verdadero proyecto mafioso, único triunfador de esta guerra.

El paramilitarismo como apuesta mafiosa en conquista de la institucionalidad, logra imponerse como poder político, sometiendo o comprando a las élites tradicionales; como poder económico, ex-

<sup>18</sup> Ibid, p. 111.



pandiendo con el uso de la violencia su dominio territorial, penetrando y controlando las estructuras económicas tanto legales como ilegales y, como verdadero poder mafioso, capaz de imponerse en el mundo de lo público, pues el uso sistemático de la violencia, el control de las economías lícitas e ilícitas a su favor y, la posibilidad creciente de administrar el clientelismo político en pro de sus intere-

ses, le ha permitido ampliar sus radios de acción de tal manera, que ha adquirido la capacidad para incidir en las agendas gubernamentales y, en últimas, para imponer las condiciones propias del dominio del capital ilícito en un sociedad: la creación de legitimidades e identidades en torno a las múltiples expresiones (sociales, políticas, económicas, políticas y culturales) que este puede adquirir<sup>19</sup>.

---

✖



---

19 Sólo para darle bases sólidas a mi argumento, señalo ejemplos fehacientes de lo que resulta ser un panorama lamentable para el país, pero que resulta inevitable hacerlos: la parapolítica, la yidispolítica, las empresas nacionales y multinacionales que financiaban y ayudaban a ingresar armas para el paramilitarismo como el caso de La Chiquita Brands, el sometimiento de otras estructuras delictivas y de economías ilícitas por parte del paramilitarismo como en los casos del Chance en la costa Caribe, el contrabando de gasolina en la Guajira, las economías informales y el contrabando de mercancías en ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, entre otros.